

LA GESTIÓN DE LOS ASUNTOS MUNICIPALES EN LA CORTE DE FELIPE III: SÍNDICOS Y EMBAJADAS DE LA CIUDAD DE ORIHUELA¹.

David Bernabé Gil
Universidad de Alicante

En la monarquía hispánica de los Austrias, y en el caso concreto de los reinos que integraban la Corona de Aragón, es lugar común admitir que el diálogo entre la corte y la periferia se realizaba de forma ordinaria a través del complejo entramado institucional que conformaba la administración territorial. Virreyes, Audiencias, Gobernadores, Bayles, Procuradores Patrimoniales y otros oficiales regios, en su mayor parte de nivel inferior, configuraban una tupida red de poderes intermedios, con sus correspondientes espacios políticos, cuyo protagonismo resultaba esencial para el gobierno efectivo de los reinos, al tiempo que mediatizaban con su actuación las vinculaciones entre dos importantes instancias de poder: la real y la municipal.

Ciertamente, durante las sesiones de las Cortes -escasamente convocadas ya a partir del reinado de Felipe II- los municipios del realengo tenían oportunidad de entrar en contacto directo con el entorno del Monarca. Pero, al tener que encauzar dicha negociación como parte integrante de uno de los brazos, las posibilidades de obtener satisfacción a sus demandas -especialmente las de alcance más local- quedaban condicionadas en buena medida por el sentir de los demás miembros del brazo real. En cualquier caso, una vez finalizada la actividad desarrollada en Cortes, la espera hasta una próxima convocatoria podía hacerse demasiado larga como para renunciar a plantear aquellos asuntos importantes que acuciaban al municipio en cuestión, bien por no haber quedado entonces satisfactoriamente resueltos, bien por constituir novedad que exigía pronta determinación.

Es sabido que, precisamente para tratar de llenar ese vacío político producido entre unas cortes y las siguientes, también el estamento real -como el militar y el eclesiástico- solía celebrar juntas cada cierto tiempo, donde se abordaban cuestiones que, presumiblemente, podían resultar de interés general; y que, a través del envío de embajadas, cada estamento pudo convertirse en interlocutor de una parte del reino en el diálogo con la Corona. Ahora bien, con una composición prácticamente reducida a las autoridades urbanas de la capital del Reino, es difícil que dichas juntas pudieran hacerse eco de aquellos problemas que afectaban únicamente a municipios concretos². La escasa frecuencia de la celebración de cortes y la limitada representatividad de las juntas del estamento real debieron contribuir, por tanto, a mantener e impulsar otras vías alternativas y complementarias de comunicación directa entre los núcleos urbanos y la corte.

Por otro lado y a pesar del desarrollo institucional experimentado por esos poderes territoriales que ejercían en el reino la representación e intermediación de la jurisdicción regia, conformando la administración real, la relación directa con el Monarca -o su entorno- se contemplaba desde las corporaciones locales como una vía necesaria e insustituible para alcanzar determinados objetivos. No en vano, entre los atributos de la realeza destacaban los de erigirse en fuente suprema en la administración de la justicia y de la gracia -que no era sino una forma específica, en su versión *distributiva*, de aquélla. En consecuencia, fue la

¹ Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación PB97-0112, financiado por el Ministerio de Educación.

² V. GIMÉNEZ CHORNET., "La representatividad política en la Valencia foral", *Estudis*, núm. 18 (1992) pp. 7-28; E. SALVADOR ESTEBAN., "Las Cortes valencianas y las Juntas de Estamentos", *Felipe II y el Mediterráneo*, Madrid, 1999, IV, pp. 139-158.

posibilidad de acudir ante el Monarca como última instancia judicial —especialmente para los súbditos de los reinos de Valencia y Mallorca, y a diferencia de los de Aragón y Cataluña³— y como proveedor de gracias, privilegios y mercedes lo que habría animado a los municipios a tratar de mantener abierta esa vía de relación directa con la corte; más allá de las insoslayables vinculaciones que, de acuerdo con el organigrama institucional, quedaban obligados a establecer con el entramado de la administración territorial, y al margen de las posibilidades que le brindaban los órganos representativos del reino.

A este propósito, investigaciones recientes han revelado la presencia en la corte de procuradores, síndicos, solicitadores, mensajeros, legados, agentes de negocios y embajadores procedentes de ciudades castellanas y de las capitales de los reinos de la Corona de Aragón, así como de otras corporaciones provinciales de esta última y de los dominios italianos⁴. Y aunque ya comenzamos a conocer datos de gran interés acerca de las pautas políticas en que se enmarcan sus actuaciones y de sus vinculaciones con las instituciones centrales y con el gobierno de corte, queda aun bastante camino por recorrer para poder establecer paralelismos y análisis comparativos, pues ni siquiera sabemos si nos hallamos ante una práctica generalizada —como parece— o meramente coyuntural.

A partir de estas consideraciones, en el presente trabajo —que anticipa una investigación en curso de mayor alcance sobre el tema— se abordará el análisis de la representación municipal en el entorno regio —entendiendo éste en su plasmación institucionalizada dentro del sistema polisindial—, como conveniente contrapunto a aquellos otros estudios —más numerosos— que, inversamente, han venido prestando mayor atención a la acción de los representantes regios en el ámbito municipal⁵. Para ello se ha tomado como referencia una ciudad valenciana de primer orden, con suficiente entidad desde el punto de vista institucional, territorial y socioeconómico como para generar situaciones, tensiones y relaciones de poder susceptibles de trascender el estrecho marco municipal. Orihuela, en efecto, no solamente asumía funciones de capitalidad civil, eclesiástica y cultural en el sur del reino —como cabe-

³ Sobre esta discriminación territorial, J. ARRIETA ALBERDI, *El Consejo Supremo de Aragón, 1494-1707*, Zaragoza, 1995, pp. 526-529.

⁴ Para Castilla, J. MONTEMAYOR, "De las Cortes a la Corte. Oligarquías municipales y monarquía (1650-1700)", en J. L. CASTELLANO (ed.), *Sociedad, Administración y Poder en la España del Antiguo Régimen*, Granada, 1995, pp. 237-249; M. REDER GADOW, "Málaga en Madrid: el Regidor malacitano Don José Pizarro del Pozo y Eslava, Diputado en la Corte", en P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO (ed.), *Monarquía, Imperio y Pueblos en la España Moderna*, Alicante, 1997, pp. 307-320; de la misma autora "Los gestos del municipio de Málaga en la corte madrileña (siglo XVII)", en estas mismas actas sobre *Espacios de poder: cortes, ciudades y villas*; así como las ponencias presentadas en dicho Congreso Internacional por J. M. GONZÁLEZ BELTRÁN, "La ciudad presente en la Corte: la diputación del regidor gaditano don Rodrigo Caballero (1697-1699)" y por J. J. RUIZ IBÁÑEZ y J. D. MUÑOZ RODRÍGUEZ, "Sirviendo a la corte en la aldea, sirviendo a la corte: veteranos, agentes y medios de relación en el siglo XVII castellano". Para los dominios italianos y de la Corona de Aragón, C. PÉREZ APARICIO, "Centralisme monàrquic i resposta estamental: l'ambaixada valenciana del Senyor de Cortes (1667-1668)" y M. CALVO RODRÍGUEZ, "Embajadas y embajadores de Barcelona enviados a la Corte, en la segunda mitad del siglo XVII", ambos en *Pedralbes. Revista d'Història Moderna*, núm. 13-I (1993) pp. 327-340 y 535-544, respectivamente; A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARINO, "Pervenire alle orecchie della Maestà: el agente lombardo en la corte madrileña", *Annali di Storia Moderna e Contemporanea*, núm. 3 (1997) pp. 173-223; del mismo autor "Corte, reinos y ciudades en la monarquía de Carlos II: las legaciones provinciales", *Pedralbes. Revista d'Història Moderna*, núm. 18-II (1998) pp. 221-250; y, más ampliado, "Ceremonial de palacio y constitución de monarquía: las embajadas de las provincias en la Corte de Carlos II", *Annali di Storia Moderna e Contemporanea*, núm. 6 (2000) pp. 227-358.

⁵ Un intento de sistematización, para el reino de Valencia, en D. BERNABÉ GIL, "Els procediments de control reial sobre els municipis valencians (segles XVI-XVII)", *Recerques*, núm. 38 (1999) pp. 27-46.

za de Gobernación, Baylía General y Obispado y sede universitaria- sino que, además, albergaba unas poderosa oligarquía urbana y señorial, poseedora de grandes patrimonios agrarios y celosa defensora de su privilegiada situación. El periodo de tiempo a considerar, por otro lado, se ha tratado de que fuera lo suficientemente extenso como para permitir la observación de una buena muestra de situaciones, e incluso su reiteración en muchos casos, además de su frecuencia; pero también que estuviera dotado de una cierta unidad argumental. Así, aun con las inevitables lagunas documentales que presenta la fuente básica de información utilizada -correspondencia remitida y recibida entre Orihuela y Madrid o Valladolid, y deliberaciones de las autoridades municipales-, el reinado de Felipe III cubre un número de años idóneo para tratar de perseguir los objetivos propuestos. Pero más que profundizar en el análisis de los asuntos concretos que motivaron el establecimiento de vinculaciones directas entre Orihuela y la corte y en la resolución de aquéllos, de indudable interés para poder trazar un balance político-institucional del resultado de dichas relaciones, interesará aquí abordar el marco general en que se desarrollaron, con especial atención a los elementos formales e instrumentales, pero también de carácter personal, constitutivos del entramado negociador por ambas partes.

Mencionadas ya, a grandes rasgos, las razones que justificaban la conveniencia de disponer de vías de negociación directa con la corte, y en lo que respecta al reino de Valencia, es probable que las entidades municipales de cierta importancia contaran con representantes permanentes en Madrid, al menos para el seguimiento y gestión ordinaria de los asuntos que, en materia de justicia contenciosa, podían llegar al conocimiento del Consejo de Aragón. Así ocurría, al menos, en el caso concreto de la ciudad de Orihuela, que, a título de síndico, procurador o agente de negocios, siempre dispuso de un apoderado permanente en la corte, con salario anual fijo, para ocuparse de todos aquellos asuntos que le encomendaran las autoridades urbanas. Durante los 23 años que duró el reinado de Felipe III fueron 5 los síndicos ordinarios que ejercieron en nombre de Orihuela, con una duración media en dicha actividad que, en realidad, sobrepasa ampliamente los teóricos 4,5 años, hasta llegar a duplicarlos.

El primero, Gerónimo Gatuelles, había iniciado sus servicios como síndico de la ciudad del Segura antes de 1591 y en ellos permaneció hasta su fallecimiento, en junio de 1600. Su diligencia y buen hacer y la colaboración proporcionada por su hijo Vicente durante los últimos meses de vida hizo que a éste no le fuera difícil suceder de inmediato a su padre, de modo que figuró como asalariado de Orihuela hasta 1609. Cuatro años antes, sin embargo, ya había entrado al servicio de la misma Miguel Urgell, quien permaneció como síndico hasta 1610, en que falleció. A partir de este año le sustituyó en dicha función Miguel Jerónimo Claros, hasta 1618, en que fue nombrado Juan Bautista Tallaferro; aunque en 1620 la ciudad volvió a contar nuevamente con los servicios de Claros durante otros tres años más. Tallaferro, por su parte, ya no los abandonaría hasta después de 1632⁶.

Además de estos síndicos ordinarios y permanentes, algunos de los cuales tuvieron que compartir mutuamente sus actividades durante un tiempo, en ocasiones las autoridades municipales otorgaron poderes para actuar también en nombre de la ciudad a procuradores y letrados asentados en la corte que prestaron sus servicios por tiempo limitado. Fue el caso de Juan Pérez Nuño, aproximadamente desde el verano de 1613 hasta el de 1614 —durante la sindicatura ordinaria de Claros— y del Dr. Salvador Ximeno, en un año, 1620, en que también figuraban el mencionado Claros y Tallaferro. En consecuencia, nada impedía que la

⁶ La información sobre los años de ejercicio de los síndicos procede de las cartas enviadas (copias) y recibidas por las autoridades municipales, que figuran cosidas en los Libros Contestadores, uno por cada año, custodiados en el Archivo Municipal de Orihuela (en adelante AMO).

representación ordinaria de Orihuela en la corte, cubierta de forma permanente, fuera ejercida por más de un síndico al mismo tiempo.

Con todo, estos síndicos ordinarios y permanentes, de procedencia desconocida y residencia habitual en Madrid -excepto Vicente Gatuelles, obligado a instalarse en Valladolid, mientras la Corte estuvo allí ubicada- en modo alguno llegaron a agotar el sistema de representación municipal en el entorno del Monarca. Al fin y al cabo, se trataba de profesionales que, por mucho y bien que conocieran los cauces reglamentarios por donde discurrían las negociaciones, por muy familiarizados que estuvieran con los entresijos de la corte, para moverse y maniobrar con habilidad en dicho medio, ocupaban una posición subalterna en la estrategia de acción política a desarrollar por la ciudad. Su condición mercenaria, la ausencia de un cordón umbilical que, más allá de la fría relación contractual, les mantuviera íntimamente ligados a la patria cuyos intereses trataban de defender, exigían otra fórmula a través de la cual ésta última pudiera realmente hacerse presente en la corte. En un marco de relación política donde la proximidad física al más importante de los núcleos de poder resultaba esencial para obtener resultados, esta intermediación en la distancia sólo podía conseguirse a través de un legado especial enviado *ex professo*⁷. Por consiguiente, cuando a la ciudad se le planteaban asuntos de cierta importancia, de cuya resolución podían seguirse graves perjuicios o cuantiosos beneficios, las autoridades municipales disponían de un recurso complementario para hacerse oír ante el monarca: el envío de un embajador, mensajero o síndico extraordinario para actuar con plenos poderes en la corte.

Entre las múltiples diferencias que se irán señalando al comparar este otro tipo de apoderados municipales con los síndicos ordinarios, cabe anotar por el momento la excepcionalidad de las embajadas y, por tanto, el carácter temporal de la misión a desempeñar por estos emisarios, frente a la permanencia de aquéllos. Pero, contrariamente a lo que, en principio, cabría esperar, sorprende un tanto la elevada frecuencia con que la ciudad decidió encomendar la gestión directa de determinados asuntos a embajadores oriolanos nombrados *ex professo* o aprovechando su presencia en la corte. Así, de un total de 16 años sobre los que se dispone de noticias, para los 23 que comprende el reinado de Felipe III, sólo en dos de ellos -1607 y 1618- es seguro que no se designó embajador alguno; mientras que desconocemos lo ocurrido en otros seis: 1601, 1604, 1606, 1610, 1615 y 1621⁸. En los quince años restantes hubo momentos, a veces periodos prolongados, en que la dirección y gestión directa de los asuntos tratados en la corte fue asumida por un embajador o mensajero especial llegado desde Orihuela. En total, el envío de embajadores se hizo efectivo en 13 ocasiones, pues hubo algún caso en que, tras la preceptiva designación por parte del órgano municipal competente, no queda rastro alguno de que se produjera realmente el viaje del agraciado a la corte.

Tanto el nombramiento -o destitución- de un síndico ordinario como la designación de un embajador eran decisiones no siempre exentas de controversias en el seno de la oligarquía municipal. En el reclutamiento de un síndico podían intervenir factores tales como el parentesco con el anterior, las buenas referencias por parte de algún confidente, la reputación o experiencia contrastada de la valía personal, a través de los éxitos alcanzados, y su amistad y relaciones personales con los miembros del Consejo de Aragón. Su revocación,

⁷ Vid. A. M. HESPANHA., "La Corte", en *La gracia del derecho. Economía de la cultura en la Edad Moderna*, Madrid, 1993, pp. 177-202, esp. pp. 189-190.

⁸ La ausencia de los libros Contestadores correspondientes a los años 1601, 1604, 1606, 1608, 1610, 1615 y 1621 impide disponer de datos para dichos años, excepto cuando hay correspondencia fechada a principios del año siguiente, como ocurre en 1609.

en los contados casos en que la muerte no les sorprendió sirviendo a la ciudad, dependía en gran medida de los informes desfavorables que sobre su persona emitieran los propios embajadores u otros personajes vinculados a la ciudad que habían tenido la oportunidad de conocer *in situ* su quehacer y de la pobreza de resultados obtenidos por su labor.

Cuando en junio de 1600 Vicente Gatuelles solicitó y obtuvo de Orihuela su nombramiento como síndico hizo valer, con éxito, su condición de hijo del recientemente fallecido apoderado de la ciudad y la colaboración prestada en dicha labor durante el último año, a plena satisfacción de las autoridades municipales⁹. Dos años más tarde, sin embargo, ante las reticencias mostradas hacia su persona por el mensajero oriolano en la corte Micer Francisco Jerónimo Pérez -que lo había tenido a su servicio y le despidió en un asunto particular- en el *consell* municipal se planteó votar sobre su revocación, con diversidad de pareceres¹⁰. La falta de la mayoría necesaria para destituirle le mantuvo en su puesto, pero en 1605 volvía a cuestionarse nuevamente su renovación, por haber tenido que ausentarse de la corte una temporada, para marchar a Portugal. Para cubrir esta ausencia, Gatuelles había dejado como apoderado y sustituto provisional a Guillén Balaguer, quien al ser calificado por un confidente de la ciudad como hombre inteligente, de confianza y factura de D. Felipe Tallada -uno de los regentes valencianos del Consejo de Aragón- se convirtió -quizá involuntariamente- en potencial candidato para ocupar su puesto definitivamente¹¹. Pero, finalmente, las autoridades oriolanas siguieron el parecer de su embajador, Andreu Martí, partidario de aceptar los servicios como segundo síndico -que acabaría arrinconando, en la práctica, al primero- de Miguel Urgel¹². La destitución de Gatuelles no llegaría hasta mayo de 1609, en que el *consell* decidió prescindir de sus servicios argumentando que su mantenimiento representaba un coste innecesario para las arcas municipales, toda vez que era Urgel quien realmente venía ocupándose de los asuntos de Orihuela¹³.

Las opiniones y preferencias de los embajadores, resultado del grado de colaboración hallada en los potenciales síndicos de la ciudad, podían resultar a veces determinantes para su consolidación como tales. En abril de 1613, el embajador doble -pues lo era del cabildo catedral y de la ciudad, al mismo tiempo- Dr. Gabriel Palma de Fontes comenzó a contar en la corte con los servicios de Juan Pérez Nuño, "*que fue gran ventura encontrallo que era recién venido de Balladoli y es diligente en negocios y bien ablado*", especialmente para la elaboración de memoriales¹⁴. Las relaciones de Palma de Fontes con el síndico ordinario Miguel Jerónimo Claros no eran malas, pero al año siguiente la labor de este último había quedado ostensiblemente oscurecida por Pérez Nuño, quien no sólo se había convertido en estrecho colaborador del nuevo embajador -D. Jaime Rosell- sino que se permitió transmitir a las autoridades oriolanas la sugerencia recibida del entorno regio para "*que se quiten los usos que ay de enviar cindicos a esta corte con tanto gasto de la republica, que sierto no se como me quisieron dezir esto y solo digo que todos estos señores del Consejo de Aragón me hazen muy grande merced y tengo con todos muy entrañable amistad*"¹⁵. Posiblemente conocedor de estas maniobras, Claros no dejaba de quejarse amargamente a la ciudad por la marginación de que era objeto, al tiempo que manifestaba también sus excelentes relaciones con los regentes del Consejo de Aragón, como garantía de continuidad: "*Vs. ms. pueden*

⁹ AMO. Contestador de 1600, fol. 462r-v.

¹⁰ AMO. Contestador de 1602, fols. 270-272v.

¹¹ AMO. Contestador de 1605, fols. 485-486, 491-492.

¹² AMO. Ibidem, fols. 484r-v, 490r-v, 501, 529.

¹³ AMO. Contestador de 1609, fols. 110-112.

¹⁴ AMO. Contestador de 1613, fol. 477.

¹⁵ AMO. Contestador de 1614: fols. 375r-v, 409r-v, 410,

*estar muy ciertos de que en todo lo que pudiere acudiré a los negocios de esa Ciudad con el amor y cuidado de siempre y que el grande deseo que tengo de acudir a ellos se me paga mal pues encomiendan vs. ms. a otri algunos negocios y agora ultimamente (...) se esconden de mí, y yo no se quien ordena que se de orden a otro que a mi, sabiendo el cuidado que yo tengo en los negocios de esa Ciudad y la merced que estos señores del Consejo me hacen, vs. ms. lo manden considerar y no permitir que se remitan a otri los negocios de esa Ciudad pues yo soy síndico y servidor antiguo de ella y no he desmerecido por ningún camino que deje de acudir a todo lo que le está bien y se le ofreciere y al de vs. ms. en particular*¹⁶.

Tres años más tarde Claros tuvo que hacer frente a una dura campaña de desprestigio orquestada contra su persona por el mensajero oriolano Dr. Joan Limiñana, quién, además de tacharle de avaricioso y negligente, propuso su sustitución por Diego Lozano, antiguo síndico a las órdenes de la ciudad de Valencia que acabó ofreciendo sus servicios a la de Alicante¹⁷. Pero, pese a todo, Claros continuó figurando como asalariado de la ciudad del Segura al menos hasta el verano de 1618, aunque el año anterior, para poder cobrar las tres anualidades atrasadas que se le debían, tuvo que presentar una carta del secretario del Consejo de Aragón, Domingo Ortiz, donde se aseguraba *"con las veras y puntualidad, que ha acudido a los negocios que se han ofrecido della y del servicio de los s(ñ)ores Jurados predecesores de vs.ms. y porque me ha dicho que para los primeros de sett(iembr)e que viene se le deveran tres años de su salario de sindico en esta corte (...) esto demas de ser tan justo toca en la reputación dessa ciudad, pues no es bien q(ue) se diga q(ue) quien la sirve aquí en sus neg(o)cio)s no esta muy puntualm(en)te pagado"*¹⁸. La confianza depositada en su labor había quedado seriamente dañada, sobre todo cuando en 1617 llegó a prestar sus servicios como síndico de la ciudad de Alicante, que precisamente por entonces se hallaba en pleitos con Orihuela¹⁹. No obstante, no debía carecer de sólidos apoyos en la ciudad del Segura, pues en marzo de 1620, cuando hacía ya más de un año que el municipio disponía de nuevo síndico ordinario en la corte -Juan Bautista Tallaferro-, estrecho colaborador del embajador -D. Jaime Rosell, una vez más-, y contaba con el asesoramiento letrado en Madrid del Dr. Salvador Ximeno, el *consell* oriolano aceptó la propuesta de su abogado ordinario de volver a contar nuevamente con los servicios de Claros²⁰. Y así permaneció hasta 1623²¹. Posiblemente, la preciosa información que solía incluir en la correspondencia remitida a Orihuela sobre los más variados sucesos acaecidos en la corte -de carácter íntimo a veces, aprovechando su condición de cuñado de un médico de palacio, el Dr. Pelegrín-, si bien contribuyó a encubrir su supuestamente mediocre diligencia negociadora, pareció resultar, a la postre, del agrado de la ciudad, nada interesada en desprenderse de tan privilegiada fuente de noticias²².

¹⁶ Ibidem, fol. 429.

¹⁷ AMO. Contestador de 1616, fol. 446; Contestador de 1617, fols. 416v, 448-449. La referencia a Lozano como síndico de Alicante, en 1619.

¹⁸ AMO. Contestador de 1617, fol. 460.

¹⁹ Ibidem, fol. 459.

²⁰ AMO. Contestador de 1620, fol. 103;

²¹ AMO. Cartas de 1623-1624, fol. 34.

²² Muchas y variadas fueron las noticias cortesanas relatadas por Claros en sus misivas, algunas de ellas relativas a política internacional. Entre las más conmovedoras, podrían mencionarse las descripciones de las últimas horas de vida de la reina Margarita, en 1611 -a partir del desgraciado alumbramiento del infante Alfonso (AMO. Contestador de 1611, fols. 552-554v.)- y del regente del Consejo de Aragón D. José Pérez Bañatos, en 1614 (AMO. Contestador de 1614, fol. 472r-v; y entre las más interesantes, las relativas a la situación en Francia, entre 1611 y 1612, y su relación con el futuro matrimonio entre la infanta D^a Ana y

Como ya ha quedado de manifiesto, la amistad y buenas relaciones con los miembros del Consejo por parte de los síndicos o agentes de negocios que pululaban por la corte eran elementos altamente apreciados por sus potenciales clientes. Pero también la experiencia acreditada por un síndico de la parte contraria en el desarrollo de un pleito pudo llegar a ser positivamente valorada de cara a un posible fichaje futuro. Probablemente esa fuera la razón determinante en la contratación de Juan Bautista Tallaferro, a quien en 1614 -cuatro años antes de entrar al servicio de Orihuela- encontramos como apoderado del señor de Albatera, en un litigio contra dicha ciudad²³. Por lo demás, tampoco debía ser excepcional que un síndico fuera agente a un mismo tiempo de más de un municipio, como quedó en evidencia cuando surgieron disputas entre ellos, pues -entre otras razones- con el salario de un único cliente resultaba imposible mantenerse en la corte. Además del ya mencionado caso protagonizado por Claros, así ocurría, por ejemplo, con Miguel Urgel, a quién en 1607 hallamos al servicio de Sueca y en 1609 al de Morvedre, tras haberlo estado también al de Alicante, sin que ello le impidiera ocuparse al mismo tiempo de los asuntos de Orihuela²⁴. Se trataba, en definitiva, de profesionales cuyos servicios como síndicos y solicitadores eran requeridos por corporaciones pero también por particulares con litigios pendientes en la corte.

Si la profesionalidad y las buenas relaciones con los miembros del Consejo de Aragón -acreditadas o supuestas- fueron elementos decisivos a tener en cuenta a la hora de elegir y mantener síndico en la corte, cuando se trataba de enviar mensajero desde Orihuela el perfil del designado obedecía a otros condicionantes; pudiéndose distinguir al menos tres grandes categorías, con algunas variantes. Por un lado, aquellos que ejercían ese año como jurados del estamento de caballeros -especialmente si lo eran *en cap*-, al tratarse del cargo municipal de carácter colegiado de mayor rango, resultaban idóneos para ostentar la representación institucional de la ciudad, sin que su ausencia del municipio provocara un significativo vacío de poder. Así lo había manifestado el abogado ordinario del *consell* en 1599, cuando iba a procederse a la elección de mensajero, afirmando que tal era la costumbre observada²⁵. En la práctica, sin embargo, esta opción fue seguida sólo en cuatro ocasiones, siendo los agraciados Jaume Togores, en 1599; Josep Orumbella, en 1600; Andreu Martí, en 1605; y Nicolau Viudes, en 1609. Variante de la misma fue la designación de un jurado del estamento de ciudadanos -Ginés Almodóvar, en el último trimestre de 1600- o de algún miembro del *consell* municipal -Francisco de la Torre, en 1602, el Dr. Joan Limiñana, en 1617-, dotados de alguna experiencia previa, excelentes aptitudes negociadoras, elevados conocimientos técnicos, o, simplemente, la intención -no siempre oculta- de aprovechar su estancia en la corte como representante de la ciudad para defender al mismo tiempo asuntos propios o medrar para la obtención de alguna merced particular.

Una segunda modalidad vendría dada por la confluencia en un mismo individuo de un par de requisitos que le hacían especialmente idóneo: por un lado, posesión de rango nobiliario, lo que le confería categoría social inmejorable para hacerse valer y *respetar* en medios cortesanos; por otro, estar ejerciendo, o haberlo hecho en el pasado, un oficio importante en la administración real. Esta última circunstancia podía contribuir a generar una favorable predisposición en el Consejo de Aragón, al tiempo que dotaba al individuo en cuestión de un profundo conocimiento personal y *profesional* de algunos de los asuntos encomenda-

Luis XIII (AMO. Contestador de 1611, fol. 457v; Contestador de 1612, fols. 208v, 213, Contestador de 1613, fol. 502r-v; Contestador de 1614, fol. 429)

²³ AMO. Contestador de 1614, fol. 438.

²⁴ El dato referente a Sueca procede de J. ARRIETA ALBERDI., op. cit., p. 568, nota 147; los relativos a Morvedre y Alicante, de AMO. Contestador de 1609, fols. 116, 407, 507.

²⁵ AMO. Contestador de 1599, fol. 6v.

dos en la embajada, como eran los referentes a la defensa de la jurisdicción de los oficiales regios con sede en Orihuela frente a otras instancias foráneas. Era el caso de D. Jaume Rossell, que actuó como mensajero de la ciudad en 1608, cuando era lugarteniente de Bayle General de Orihuela, pero también en 1614 y en 1619-1620, siendo ya Lugarteniente de Portantveus de Gobernador General, amén de señor alfonsino de Benejúzar. También D. Luis Togores, antiguo Lugarteniente de la Gobernación sureña, aceptó en 1617 el nombramiento de embajador de la ciudad²⁶. Y en 1603 hizo lo propio el capitán D. Gonzalo Maza de Lizana, quién no parece que desempeñara entonces cargo alguno en la administración civil, aunque aspiraba a alguna merced²⁷.

Finalmente, el nombramiento de embajador recayó en ocasiones sobre vecinos de la ciudad que, a la sazón, se hallaban ya en la corte gestionando asuntos propios o en calidad de mensajeros de otras instituciones oriolanas. Tal fue el caso de Micer Francisco Gerónimo Pérez, procurador patrimonial de Orihuela, que se encontraba en 1602 en Madrid cuidando de un asunto particular ante el Consejo de Aragón²⁸. Y el de los doctores Gabriel y Pere Palma de Fontes, embajadores ambos, como canónigos del cabildo eclesiástico oriolano, de dicha institución y del Obispo cuando se ofrecieron para representar también los intereses del municipio entre 1611 y 1613²⁹. Con este tipo de designaciones se trataba de aprovechar la estancia en la corte de estos notables convecinos y las posibles redes de influencias que hubieran podido ya tejer, al tiempo que reforzar el respaldo necesario para la gestión de asuntos comunes con el menor coste posible. Otras personalidades estrechamente vinculadas a Orihuela, o naturales de la misma, que sin llegar a convertirse en embajadores apoyaron ocasionalmente las gestiones de sus mensajeros y síndicos fueron D. Alonso Remiro de Espejo, en 1609³⁰; D. Guillén Soler de Rocafull, en 1614³¹; y los doctores Mosén Antonio Bellot y Jaime Rodríguez de Pisana -embajador del cabildo catedral-, en 1617³². También ellos se encontraban en la corte cuidando de sus propios asuntos cuando, sin necesidad de obtener poderes formales de la ciudad ni de sus agentes, trataron de echar una mano en la defensa de los intereses oriolanos, en sus entrevistas con los miembros del Consejo.

Además de cuantos ejercieron efectivamente como embajadores de la ciudad, también los hubo que, tras haber sido designados, no llevaron a cabo su cometido. En 1602, con ocasión de las elecciones sucesivas de Antonio Pérez y del Dr. Francisco Gil, las discrepancias surgidas en el seno de la oligarquía dirigente acabaron por impugnar la validez de ambos nombramientos. En teoría, la elección de mensajero era atribución del *consell*, pero en la práctica era habitual que dicho órgano delegara tal decisión, una vez aprobada la oportunidad de la misma, en los jurados y, si acaso, en algunos *consellers*, que actuaban conjuntamente en calidad de *electos* para dicha materia. Por razones un tanto oscuras, el *ciudadá* Antonio Pérez no quiso aceptar su designación para ir a Valladolid, realizada por los jurados y electos del *consell* el 17 de septiembre de 1602, y de cuya comisión formaba parte. Pero al tener conocimiento de que los jurados solos habían vuelto a reunirse un mes más tarde para designar al Dr. Francisco Gil, al día siguiente planteó su impugnación ante el *consell*, ale-

²⁶ Sobre el marco general en que se desarrollaron las relaciones entre estos oficiales regios y las autoridades municipales, vid. D. BERNABÉ GIL, "Oficiales de la Gobernación General y oligarquía municipal en Orihuela durante el siglo XVII", en P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO (ed.), *Monarquía, Imperio y Pueblos en la España Moderna*, op. cit., pp. 569-582.

²⁷ AMO. Contestador de 1603, fol. 563v.

²⁸ AMO. Contestador de 1602, fols. 592, 593.

²⁹ AMO. Contestador de 1611, fol. 446v.

³⁰ AMO. Contestador de 1609, fol. 403.

³¹ AMO. Contestador de 1614, fol. 331r-v.

³² AMO. Contestador de 1617, fols. 429, 462, 465,

gando que no habían sido convocados los dos *electos del consell*, además de que “no era bé que anas lo dit Micer Frances Gil perque la Ciutat porta plet ab aquell y está pendent la causa en Cort de Sa Magestat y vol anar a solicitar lo plet que porta son oncle ab Gaspar Rubes sobre la Procuradoria Fiscal y contra Micer Peris y altres”³³. Más tampoco él estaba fuera de toda sospecha, pues según la versión de quien finalmente acabaría asumiendo la legación oriolana -el caballero Francisco de la Torre-, la maniobra de Pérez no tenía más objeto, aparte de reflejar su ya vieja enemistad con el Dr. Gil, que proteger a su deudo, D. Ramón de Rocafull, Sr. de Albatera, en pleito con la ciudad por la jurisdicción criminal de su señorío, mediante el bloqueo de cualquier embajada dispuesta con dicha finalidad, como era el caso³⁴.

Es posible que otros nombramientos de mensajeros quedasen también abortados, aunque los motivos no están suficientemente claros: Joan Rois, Sr. de Cox y caballero insaculado en las bolsas de gobierno municipal, fue designado directamente por el *consell* en marzo de 1603, y aunque a los pocos días surgieron discrepancias entre los jurados cuando se trató de asignarle dietas y salario, la razón de su improbable viaje a la corte quizá guarde relación con el inmediato desmentido de las supuestas maniobras alicantinas que -en Valladolid- habrían alertado a las autoridades municipales para disponer la defensa de los privilegios urbanos³⁵. Y en marzo de 1612 el nombramiento de mensajero efectuado por los jurados, como comisionados del *consell*, recayó sobre el caballero *jurat en cap* Pere Rois³⁶; pero en ningún momento hay noticias de que llegara a desempeñar efectivamente la comisión encomendada, quizá por considerar los nuevos jurados entrantes que era suficiente continuar con los servicios que venía prestando el mensajero eclesiástico Palma de Fontes³⁷.

Quién sí se apresuró a viajar a la corte nada más obtener los poderes y demás papeles necesarios de manos de los jurados, que le habían nombrado en julio de 1605, fue el caballero Andreu Martí. A los pocos días, sin embargo, el *consell* trató de abortar la embajada, alegando que no se había contado con dicho órgano, e incluso llegó a plantearse la conveniencia de enviar otro mensajero a la corte, a designar por los electos constituidos *ex profeso*, y hacer recaer el coste de la ida y retorno de Martí sobre los bolsillos de los jurados. Finalmente, se impuso el sentido común, toda vez que las credenciales que portaba Martí ya debían estar muy cerca de las manos de sus destinatarios y no resultaba conveniente ofrecer en la corte una imagen de división interna que pudiera debilitar la posición de la ciudad³⁸.

La existencia de facciones o, cuando menos, de fisuras en el seno de la oligarquía quedó también de manifiesto en otras votaciones referentes a la designación de embajadores. Que en 1617 tres de los cinco jurados dieran su voto a D. Jaime Rosell, frente a los otros dos, partidarios de enviar a Joan Arques, entraba dentro de lo normal y no tuvo mayores consecuencias. Pero quizá no lo fuera ya tanto las circunstancias en que se produjo la apretada victoria de la candidatura de Ginés Almodóver sobre la de Antonio Pérez, en 1609, pues durante la sesión celebrada a tal efecto por el *consell*, el día 3 de mayo, no faltaron fraudes, riñas, altercados e intentonas de aplazar la decisión³⁹. Y es que la estancia en la corte en representación de una corporación proporcionaba excelentes oportunidades para la promoción personal, si la gestión se desarrollaba con normalidad, como quedó de manifiesto en aque-

³³ AMO. Contestador de 1602, la cita en fol. 280; más información en fols. 270-272v, 279-281v.

³⁴ AMO. Albatera, 1601-1687, fols. 257-258.

³⁵ AMO. Contestador de 1603, fols. 43r-v, 284r-v.

³⁶ AMO. Contestador de 1612, fols. 111v-113.

³⁷ AMO. Ibidem., fols. 194-196v.

³⁸ AMO. Contestador de 1605, fol. 246.

³⁹ AMO. Contestador de 1609, fols. 110-112.

llos casos de mensajeros que posteriormente ocuparon oficios de provisión real. Así ocurrió con Ginés Almodóver, nombrado por el *consell* síndico de la ciudad en 1605 y para quien llegó a solicitarse confirmación real⁴⁰; o con Nicolau Viudes y Andreu Rois, que fueron designados por la Corona para ejercer el cargo de *racional*, de duración trianual, a partir de temas presentadas por la ciudad, en 1609 y 1611 respectivamente⁴¹.

Formalmente, la designación de mensajero para la corte solía generar dos importantes documentos, además de las actas de la sesión municipal donde quedaban reflejadas todas las vicisitudes concernientes a la decisión adoptada. Por un lado, se redactaba un *sindicat* con los poderes que se otorgaban al embajador, consistentes generalmente en la capacidad para “*dir y allegar tot i quant sia necessari i convinga en tots los negocis y causes que a la dita e present ciutat se li oferixen, aixi per escrit com de paraula....., fer part llegitima en qualsevol causes, plets, questions, demandes e controversies, aixi mogudes com movedores.....contra qualsevols altres colegis, universitats e altres persones*”. Entre la información contenida en dicho *sindicat* solían incluirse también referencias explícitas a las razones que habían motivado el nombramiento de embajador. Por otro, los jurados de turno, con el decisivo asesoramiento del abogado o asesor ordinario del municipio⁴², elaboraban un pliego de instrucciones donde se hacía una relación de los asuntos a tratar, con los fundamentos legales y argumentos que debían exponerse en la Corte, las personalidades a entrevistar, y, en ocasiones, indicaciones precisas sobre el modo de llevar a cabo las negociaciones pertinentes⁴³. La preparación de la estrategia negociadora desde la propia ciudad venía facilitada por los conocimientos acumulados a partir de una larga experiencia precedente y, para los detalles más concretos, de la información obtenida a través del síndico ordinario por vía epistolar. De este modo, cuando el mensajero abandonaba Orihuela ya conocía importantes detalles acerca de su misión, que luego, una vez en la corte, podían ahorrarle una excesiva improvisación.

Junto con el *sindicat* y las instrucciones escritas, el embajador solía llevar consigo cartas credenciales y memoriales firmados por las autoridades urbanas con destino a las más elevadas autoridades de la corte: Su Magestad, el Marqués de Denia -luego Duque de Lerma-, el Vicecanciller de la Corona de Aragón, el secretario del Consejo de Aragón, los dos regentes valencianos de este alto tribunal y, a veces, algún otro cortesano bien relacionado con la ciudad, como D. Pedro Franqueza o el Duque de Alba. Aunque en la redacción de las cartas “*de creencia*” se detectan significativas variantes, en esencia no eran muchas las diferencias de contenido entre las dirigidas a una u otra autoridad. Se trataba con ellas de presentar al embajador ante quien era considerado como “*su protector*”, solicitar el mayor crédito en todo cuanto dijera y alegara y suplicar el favor “*dándole la mano*” y administrando justicia en los asuntos encomendados, que en ocasiones eran expresa aunque sucintamente mencionados. En 1609, por ejemplo, las cartas dirigidas a los regentes valencianos del Consejo, Felipe Tallada y José Pérez Bañatos, estaban redactadas en lengua valenciana e incluían referencias expresas al núcleo de la embajada; las destinadas al Vicecanciller Diego Clavero y al secretario Domingo Ortiz también precisaban el asunto encomendado al mensajero, pero

⁴⁰ AMO. Contestador de 1605, fols. 434, 527.

⁴¹ AMO. Contestador de 1609, fols. 59-65v; Contestador de 1611, fol. 489.

⁴² Sobre el importante protagonismo de estos letrados en la política municipal, vid. D. BERNABÉ GIL., op. cit.

⁴³ Ejemplos de estas instrucciones en AMO. Contestador de 1600, fols. 500-502; Contestador de 1603, fols. 569-571v; Contestador de 1605, fols. 530-531; Contestador de 1609, fols. 392-397v; Contestador de 1611, fols. 569-571; Contestador de 1614, fols. 345-352; Contestador de 1617, fols. 436-438; Contestador de 1619, fols. 358-361.

usaban la lengua castellana; mientras que la dirigida al Duque de Alba aludía de forma muy difusa al negocio en cuestión⁴⁴.

Cuando se trataba de memoriales, habitualmente dirigidos a Su Magestad, solían exponerse ya más detalladamente las peticiones, con un desarrollo en las alegaciones que podía abarcar argumentos de todo tipo, incluido un prolijo aparato técnico-jurídico y doctrinal. Los memoriales también podían ser remitidos con posterioridad a la llegada del mensajero y ser presentados en cualquier otro momento por éste o por el síndico ordinario, llegando a multiplicarse su número durante el transcurso de una misma embajada si se consideraba necesario y había oportunidad para hacerlo. En estos últimos casos también era frecuente que fueran elaborados ya en Madrid, en la posada del embajador, en la morada del síndico o incluso en la de cualquier letrado residente cuyos servicios fueran requeridos con este expreso propósito. Finalmente, entre los papeles que acompañaban al embajador en su viaje a la corte también era habitual encontrar copias y traslados de privilegios, sentencias, provisiones reales y otros instrumentos legales susceptibles de ser utilizados en defensa de las posiciones mantenidas por la ciudad⁴⁵. Pertrechado de toda esta variada documentación y con los mejores deseos de alcanzar el éxito en las negociaciones, el mensajero hacía su entrada en Madrid, cuatro o cinco días después de haberse despedido de su entorno familiar. Una vez instalado en la posada, debía tomar contacto cuanto antes con el síndico ordinario, que inmediatamente le pondría al corriente del estado de los negocios, con las últimas novedades producidas, y le ofrecería su más fiel y abnegada voluntad de servicio; aunque algunos embajadores deseosos de capitalizar todo el protagonismo de las negociaciones –como D. Jaime Rosell en 1614 y el Dr. Juan Limiñana en 1616/17– parecieron ignorar a los síndicos desde el primer momento. De resultados de estos primeros encuentros podía surgir una estrecha colaboración, cimentada en una confianza mutua, o plantearse una coordinada división del trabajo a realizar, siempre bajo la dirección del embajador. Así ocurrió con los equipos formados por D. Gonzalo Maza de Lizana y Vicente Gatuelles en 1603, Andreu Martí y Miguel Urgel en 1605, y D. Jaime Rosell y Juan Bautista Tallaferro en 1619/20. Pero, inversamente, también podían suscitarse suspicacias y recelos que, en algún momento, llegarían a entorpecer la necesaria unidad de acción. En septiembre de 1616 el Dr. Joan Limiñana informaba a la ciudad que "*per descarrech de ma consentia dich ques pertitio fer confiansa de Claros y que.s paga lo salari debades*"⁴⁶. Unos meses más tarde continuaba tachándole de "*desvengonyat*"; y, en relación con las aspiraciones a cobrar sus emolumentos "*entenche que no deu tenir raho porque de sempre juga a lo adelantado*"⁴⁷.

A veces, las relaciones entre ambos representantes de la ciudad cambiaron con el paso del tiempo, y lo que en un principio fueron sospechas y recelos por parte del embajador, se tornó luego en alabanzas y excelentes informes sobre la labor desarrollada por el síndico. Cuando en la Pascua de 1609 llegó a la corte el mensajero oriolano Nicolás Viudes, una de sus primeras actuaciones consistió en someter a un severo interrogatorio al síndico Miguel Urgel, pues recientemente había estado al servicio de Alicante; y, según informaba éste, "*me començo a cargar la mano por los memoriales.....diziendo que eran en perjuicio de esa Ciudad (de Orihuela) y sus preheminiencias, passando sobre ello muchas platicas de preguntas y respuestas*"⁴⁸. El 23 de julio, sin embargo, Viudes apremiaba a la ciudad para que se pagasen las cantidades debidas a Urgel, encomiando su diligencia, pues "*acude a los ne-*

⁴⁴ AMO. Contestador de 1609, fols. 399-401.

⁴⁵ Una relación de estos papeles, en AMO. Contestador de 1609, fol. 398r-v.

⁴⁶ AMO. Contestador de 1616, fol. 446.

⁴⁷ AMO. Contestador de 1617, fols. 416v, 418.

⁴⁸ AMO. Contestador de 1609, fol. 407v.

gocios de la ciudad con tanta puntualidad y tantos memoriales como se han hecho, es menester estrenalle porque con él no temo a toda Castilla junta porque me haze mucha merced y me quiere mucho toda su casa...aunque al principio nos desabrimos un poco"⁴⁹. Dos años más tarde fue el síndico Miguel Jerónimo Claros quién se molestó cuando el embajador Palma de Fontes le pidió ver los papeles utilizados en las negociaciones, sospechando que se dudaba de su eficacia, lo que originó detalladas exposiciones dirigidas a las autoridades oriolanas acerca de la labor realizada hasta la fecha y de las dificultades que estaba consiguiendo sortear. Para el canónigo Palma de Fontes tales reticencias eran injustificadas, pues "no es bien extrañarse en mostrarme escripturas, pues por mi persona y por haber estudiado se me debía esto y mi industria no es tan corta que no pueda ser de mucho provecho en servicio de V.S."⁵⁰. Y aunque finalmente ambos no tuvieron más remedio que colaborar y compartir protagonismo, los celos de Claros resultaban difíciles de aplacar. Tras nueve meses de trabajo en equipo, aun se consideraba injustamente minusvalorado, y así lo comunicó a las autoridades oriolanas: "Recibí la de vs. ms. en que me mandan que me vea con el Sr. Canónigo Fontes para que me diga en que havemos de servir a esa Ciudad y aunque me parece que es desconfiar de mi cuydado y gran voluntad que tengo de servir a vs. ms. luego al punto fui a que vieramos que eran los negocios....sobre lo qual yo habia hecho diligencias y obtenido carta del Rey para que se remediase lo uno y lo otro y me parece que no se ha puesto en execucion y quíeren vs. ms. que el Sr. Canónigo ponga la mano en estos dos negocios para que saque mejor despacho que yo, y por ser gusto de vs. ms. y a mi estarme bien porque verán vs. ms. el efecto que hará más en dichos negocios el medio del Sr. Canónigo, he tenido por muy bien y a gusto mio ayudalle en esto, como lo haré en quanto fuere necesario"⁵¹.

Si la estrecha colaboración entre síndico y embajador resultaba crucial para la buena marcha de los negocios, también la ayuda de un buen letrado versado en la redacción de memoriales y en la técnica procesal podía ser importante para conseguir los objetivos propuestos. Puesto que ni el síndico ni el embajador solían ser juristas, el apoyo técnico a las demandas presentadas por aquéllos ante el Consejo procedía ordinariamente del abogado o asesor ordinario del *consell*. Pero su lejanía de la corte y, en consecuencia, las dificultades para hacer un seguimiento *ad hoc* del desarrollo de los procesos, a pesar de los informes recibidos a través de la correspondencia, determinó la conveniencia de suplir esta carencia con un letrado *in situ*, atento a cualquier contingencia. En alguna ocasión, los agentes destacados en la corte manifestaron la suficiencia de la labor desempeñada desde Orihuela por el asesor municipal. En 1617, por ejemplo, el mensajero Joan Limiñana respondía a las autoridades oriolanas que le habían ordenado buscar al mejor abogado que encontrara en Madrid, que "*semblant advocat en esta terra per veure y resoldre lo proces ab cinchcents (lliures) no.s tendra per content, y axi o Vs. ms. fan confiansa de mi o no, porque per al negoci de la manera que ve, tan be instruit y ab tan bones ordinates del doctor Andreu Jordi (asesor del consell) no té tanta necessitat de tants advocats*"⁵². Unos meses más tarde, sin embargo, ya había cambiado de opinión: "*convenia que un letrado de aquí muy famoso y accepto ayudase a hazer los memoriales y informar y para vidits y otras cosillas serian menester para dalle satisfaction mil reales*"⁵³. Y, en efecto, lo más frecuente fue que síndicos y embajadores solicitaran permiso a las autoridades municipales para recabar el apoyo de letrados residen-

⁴⁹ Ibidem, fol. 461.

⁵⁰ AMO. Contestador de 1611, fol. 466.

⁵¹ AMO. Contestador de 1612, fol. 170.

⁵² AMO. Contestador de 1617, fol. 409v.

⁵³ Ibidem., fol. 487.

tes en la corte: “*que para los negocios de esa ciudad haga elección de un letrado, como otras veces lo tengo escrito*”, insistía una y otra vez Tallafero, en 1619, desde Madrid⁵⁴, hasta que finalmente fue escuchada su petición. Algunos de estos juristas, que iniciaron sus vinculaciones con la embajada oriolana en tales ocupaciones, consiguieron más tarde acceder a la sindicatura, como Juan Pérez Nuño y el Dr. Salvador Ximeno. Y también los hubo de gran fama y elevada remuneración que prestaron sus servicios de manera ocasional. Así, D. Francisco de la Cueva y Silva, en 1609⁵⁵; el Dr. Monterde, en 1614⁵⁶; y el Dr. Juan de Molina, en 1617⁵⁷.

Mencionadas ya, a grandes rasgos, algunas de las más significativas circunstancias concurrentes en el equipo encargado de gestionar los negocios oriolanos en la corte, y dejando para otra ocasión el análisis de esos asuntos, de supuesta gravedad, cuya resolución se confiaba al entorno del monarca, concretado en el Consejo de Aragón, importa señalar, al menos, algunas líneas generales y criterios de clasificación. Más que por su naturaleza, es por el modo de plantearse y por el procedimiento seguido hasta su resolución que las peticiones elevadas por la ciudad podrían encuadrarse desde un punto de vista técnico administrativo en dos grandes apartados: gracia y merced –también denominado gobierno– y justicia contenciosa. Sin entrar ahora en un desarrollo pormenorizado de los elementos que caracterizan y diferencian ambas vías, importa señalar como rasgos distintivos más sobresalientes, aun a riesgo de simplificar en exceso, los tres siguientes: a) la consideración de un asunto como de gobierno implicaba, en principio, la inexistencia de otra parte contendiente, mientras que la vía de justicia contemplaba necesariamente la figura de un opositor, aunque fuera el fisco; b) sólo en el segundo caso, el mecanismo que conducía hasta la resolución final adoptaba forma procesal, con arreglo a las diligencias que prescribía el derecho; y c) mientras que la vía de justicia culminaba con una sentencia, que hace del asunto en cuestión cosa juzgada, las decisiones con que el monarca zanjaba las consultas procedentes de la vía de gobierno no alcanzaban aquella categoría.

Una aplicación estricta de esta dicotomía a la variedad de negocios planteados ante el Consejo por los síndicos y embajadores oriolanos refleja un predominio abrumador de la vía de gobierno sobre la de justicia. Descontados los asuntos relativos a provisión de oficios –racional, procurador patrimonial–, en los que la ciudad podía participar elevando propuestas, y contabilizando una sola vez aquellos temas que reaparecen repetidamente a lo largo del periodo, la vía de gobierno fue utilizada aproximadamente tres veces más que la de justicia, pues fue seguida en un total de 38 casos, mientras que sólo en 12 ocasiones la presencia de contendientes hizo que se solicitara o adoptara la vía procesal para su resolución. En este último caso, además, se trató casi siempre de recursos de sentencias anteriores pronunciadas por otros tribunales –Real Audiencia de Valencia, Baylía General de Orihuela–, aunque tampoco faltaron las peticiones de causas *videndi et recognoscendi*; e incluso hubo pleitos en los que tuvieron que intervenir otros Consejos –el de Castilla, el de Ordenes, el de Inquisición– en consideración a la calidad del negocio.

Pero, con independencia de las vías utilizadas para tratar de resolver aquellos asuntos que las autoridades municipales consideraban de gran trascendencia para la conservación y aumento de los derechos y privilegios de la urbe, la índole de los temas planteados permite comprobar la gran heterogeneidad de las materias planteadas. Por su mayor trascendencia destacan los asuntos de carácter *jurisdiccional*; esto es, aquellos en que estaba en juego el

⁵⁴ AMO. Contestador de 1619, fol. 387.

⁵⁵ AMO. Contestador de 1609, fol. 458.

⁵⁶ AMO. Contestador de 1614, fol. 376.

⁵⁷ AMO. Contestador de 1617, fol. 409v.

mantenimiento de las prerrogativas jurisdiccionales de ciertos oficios u organismos con sede en Orihuela y que, por ello, las autoridades urbanas defendían ante cualquier intento de intromisión o menoscabo por parte de otras instancias administrativas. En este apartado cabe distinguir, a su vez, los asuntos relativos a la defensa de la jurisdicción de los oficiales regios frente a otros tribunales foráneos, al objeto de mantener el prestigio de la ciudad y de ahorrar gastos a sus vecinos, y los que se refieren a las prerrogativas de las magistraturas municipales, en este caso frente a la administración regia, señorial y la propia Diputación de la Generalidad del Reino, para la salvaguardia del espacio político urbano. Junto a los negocios relativos a la defensa de la integridad territorial y jurisdiccional de la ciudad, cabe mencionar las tentativas de reforma de algunos estatutos por los que se regía el gobierno municipal; la búsqueda de nuevos recursos que pudieran aliviar la exhausta hacienda local; las gestiones orientadas a la mejora de las recaudaciones fiscales; la preocupación por el mantenimiento del dispositivo defensivo litoral con el mínimo coste económico sobre el vecindario; la consecución de ventajosas condiciones para el desarrollo de la actividad comercial, especialmente la orientada a la exportación de cosechas locales; la reserva de los terrenos comunales para el vecindario o para sus explotación por la ciudad; el desarrollo de una política poblacionista orientada al asentamiento de cuantiosos efectivos demográficos; y, en fin, cuestiones relacionadas con el nombramiento de oficios cuya provisión tocaba al Consejo.

Como era de prever, las diligencias llevadas a cabo por los gestores destacados en Madrid no siempre se vieron coronadas por el éxito, pues en unos casos contaron con la firme oposición de terceros, directamente afectados; en otros, con la inflexibilidad del Consejo ante posibles novedades de implicaciones inciertas; finalmente, no siempre la calidad de las mercedes esperadas podía verse correspondida con la cuantía de los servicios ofrecidos. Y puesto que tampoco es momento de detenerse en un examen particularizado de los resultados de cada petición, mencionaremos algunos aspectos relativos al *modus operandi* de las partes intervinientes en las negociaciones, cuyas líneas esenciales es posible rastrear a través de la correspondencia cruzada entre Orihuela y Madrid -o Valladolid, para el periodo de 1602-1606, e incluso Valencia, en 1599.

La propia frecuencia y demás características que presenta esa correspondencia ponen de relieve la continuidad y relativa efectividad de las comunicaciones establecidas entre las autoridades locales y los agentes en la corte a la hora de dirigir y coordinar las acciones a emprender. Por razones no siempre aclaradas, una parte de esa correspondencia no quedó recogida en el lugar donde debía figurar, junto al resto de la producida ese mismo año. Pero sabemos de su existencia bien a través de las actas de las sesiones de los jurados, donde quedaban anotadas todas las recepciones, con el nombre del remitente y lugar y fecha de expedición; bien a partir de las referencias indirectas contenidas en otras misivas. Del cotejo de todas estas fuentes de información es posible afirmar que, por lo general -como era previsible-, el número de cartas recibidas fue superior al de enviadas por la ciudad. Asimismo, aquellos años en que hubo asuntos importantes que tratar la frecuencia de misivas e informes sobre el estado de las negociaciones supera holgadamente a las que se detectan cuando se dilucidaban escasos negocios o éstos no tenían demasiada entidad, hasta el punto de llegar a resultar a veces rutinarias.

La existencia de una estafeta semanal de correos para el trayecto entre Madrid y Murcia, aprovechada por Orihuela a partir de 1609 con el nombramiento de un correo mayor para el enlace con esta última ciudad, contribuyó a dotar a las comunicaciones de un mayor grado de fluidez. Pero aun así tampoco faltaron las quejas por cierta desorganización, que ocasionó retrasos injustificados e incluso el extravío de algunas misivas, de fatales consecuencias para el desenlace de algún negocio urgente. En 1611 el síndico Claros exponía cómo "anda

la estafeta tan descarriada y sin concierto y verdaderamente que se debe remediar porque no puede haber buena correspondencia de la suerte que está hoy....no llegan las cartas y cuando me escriben a mí vienen tan tarde y son tan añejas que es lástima y tal cosa de prisa se puede ofrecer que por la mala diligencia se pierda el negocio"⁵⁸. Un año más tarde insistía en "que la estafeta anda tan quebrada y tardía que es vergüenza de los de Murcia"⁵⁹. Y al cabo de otros dos años la situación no había cambiado mucho, a juicio del embajador D. Jaime Rosell, pues la última carta de la ciudad, fechada el 19 de mayo, no le llegó hasta el 3 de junio, por lo que "ha tardado dos estafetas y la tengo por muy fresca, según se detienen otras, por el mal orden que hay de Orihuela a Murcia"⁶⁰. Es por ello que a veces se utilizaran también otras vías, por Alicante, incluso por Valencia, o encomendando los pliegos a particulares de confianza dispuestos a realizar el recorrido sin necesidad de esperar a que saliera la siguiente estafeta.

Si la fluidez y rapidez de las comunicaciones entre la corte y la ciudad resultaba esencial para informar, solicitar instrucciones precisas y recibirlas a tiempo, tampoco podía descuidarse el puntual seguimiento del estado de los negocios que, planteados en Madrid, también pasaban por Valencia. Al igual que en la corte regia, también en la capital del reino, como sede del Virrey, de la Audiencia, de la Diputación del General y de los Estamentos, Orihuela contaba con uno o varios síndicos permanentes y, en ocasiones, con embajadores especiales. Además de ocuparse de la tramitación de los asuntos ordinarios pertenecientes a la jurisdicción virreinal, el tándem formado por el Lugarteniente General y su Consejo valenciano era frecuentemente requerido por el Supremo de Aragón para obtener más información y nuevos elementos de valoración antes de pronunciarse sobre un negocio y elevar al monarca la correspondiente *consulta*. De ahí que la actividad de los agentes oriolanos en Valencia resultara imprescindible para alcanzar el éxito en Madrid. Eran ellos quienes trataban de convencer a los *oidores* valencianos de la justicia que asistía a las pretensiones de la ciudad; quienes, a partir de la información obtenida en esos encuentros, insinuaban a las autoridades oriolanas la conveniencia de introducir los cambios necesarios en la estrategia negociadora a desarrollar por los agentes en la corte; quienes, en definitiva, contribuían a perfilar -o ponían en ello su empeño- la *versión valenciana* de los asuntos solicitados en Madrid. Así, en relación con cierto asunto que se estaba gestionando en 1602, el síndico Gatuelles escribía a los jurados: "la cartilla de información se ha despachado...y por el traslado que d'ella embio verán vs. ms. también lo que contiene, y lo que se ha de hazer es que luego se de la dicha cartilla al dicho Virrey y que se procure responda conforme a lo que vs. ms. han escrito....y venida la respuesta del dicho Virrey y conforme a lo que escriviere así se proveherá en este negocio. Vs. ms. procuren de saber quando viniere esta respuesta y me lo manden avisar para que quando se vea en el Consejo se puedan hazer las demás diligencias que convengan"⁶¹. En ocasiones, según lo requiriesen las circunstancias concretas del negocio en cuestión, incluso hubo una correspondencia cruzada directa entre los síndicos y embajadores destacados en Valencia y Madrid, sin la intermediación de las autoridades oriolanas, como ocurriera en 1614 y en 1617⁶².

⁵⁸ AMO. Contestador de 1611, fol. 519.

⁵⁹ AMO. Contestador de 1612, fol. 169.

⁶⁰ AMO. Contestador de 1614, fol. 415.

⁶¹ AMO. Contestador de 1602, fol. 509r-v.

⁶² En 1614 mantenían correspondencia directa el síndico en Madrid Juan Pérez Nuño con el mensajero oriolano en Valencia Micer Tomás Rodríguez de Pisana (AMO. Contestador de 1614, fols. 415v, 438v). Y en 1617, el mensajero en la corte Dr. Juan Limiñana con el síndico en Valencia Frances March y con el mencionado Pisana (AMO. Contestador de 1617, fols. 451, 463v).

Pero no todos las peticiones oriolanas entraban dentro de la categoría de las que requerían informe previo por parte de los agentes de la administración real en Valencia. En 1601 fue el propio secretario del Consejo, Domingo Ortiz, quien lo comunicaba a la ciudad *"porque aviendo Su Magestad visto el memorial que le dio y mandandole remitir al Consejo se ha proveído que sobre todos los cabos del se pida informacion y parescer al Sr. Marqués de Villamizar, excepto sobre lo que ha respeto a los moriscos y licencia de cavallos, porque estos no han menester aquella diligencia"*⁶³. En ocasiones, incluso era preferible para los intereses oriolanos que no se produjeran tales consultas, pues en determinadas materias el parecer de los poderes territoriales podía ser desfavorable a sus pretensiones; de modo que la noticia del despacho de una *cartilla* para el Virrey solicitando informes podía generar cierta desazón entre los agentes de la ciudad. En 1603 el embajador Maza de Lizana se temía lo peor acerca de la resolución de cierto negocio cuando exponía en carta a Orihuela *"plugiera a Dios me hubiera seguido por mi parecer que el decreto que Su Magestad ha mandado hubiera salido antes que la provisión de la consulta para Valencia, y ansi pudiera ser que se ubiera proveído sin consulta..., ya no se puede hazer mas, procuren vs. mercedes de imbiarla y mandarmela remitir quando haya venido de Valencia"*⁶⁴. Y aunque la confianza depositada en los gestores destacados en Valencia fuera considerable, la incertidumbre propiciada por el juego de intereses que se movían en torno de la corte virreinal afloraba con no poca frecuencia. En 1612 el canónigo Palma de Fontes informaba que *"la resolución que el Consejo habia tomado en el negocio...fue que se escriviesse al Sr. Visorrey que informasse, y he solicitado la carta y ansi la embio a v.s. ...y a mi me parece que si en Valencia se guia el negocio con destreza no se tratará más del, y que si se puede temer mal suceso sería muy acertado olvidar essa carta de Su Magestad"*⁶⁵.

Además de los informes procedentes de los poderes territoriales y de la capacidad para influir en ellos, de entre los variados elementos que podían propiciar una resolución favorable de los negocios planteados no era el menos importante conseguir entrevistas personales con los regentes del Consejo, con el secretario y con el Vicecanciller, en las que hacer gala de la capacidad de persuasión; y, en general *"procurara la intersessió de totes les persones a qui la ciutat escriu per a que la favoreixquen en los desusdits negocis"*⁶⁶. Únicamente el acceso a la real persona parecía reservado para las embajadas justificadas por la conveniencia de expresar los parabienes correspondientes a felices acontecimientos, como la boda real en Valencia, en 1599, o el nacimiento del Príncipe en 1605. Pero también en estos casos la ocasión podía ser aprovechada para exponer directamente al monarca los otros motivos de la embajada. En 1599 Jaume Togores refería a la ciudad: *"besé las manos de Su Magestad el miércoles último de marzo y despues de haverle dado la embajada me dijo que creia cuanto le habia dicho y que le habíamos hecho gran servicio y se acordará de la ciudad siempre que hubiera ocasión"*⁶⁷. Otros, como Andreu Martí en 1605, tuvieron inicialmente menos fortuna cuando trataron de aproximarse al monarca, pues según informaba *"Sa Magestad está en Lerma, segons diuen apres del Corpus, y volent als endemà que arribi posarme a cavall per a haver de anar a besar les mans a Sa Magestad y fer ma embaxada fui avisat de persones graves que no emprengues tal, que.m veuria en gran treball, per co que esta fet*

⁶³ AMO. Contestador de 1601, fol. 503.

⁶⁴ AMO. Contestador de 1603, fol. 574.

⁶⁵ AMO. Contestador de 1612, fol. 217.

⁶⁶ AMO. Contestador de 1600, fol. 500.

⁶⁷ AMO. Contestador de 1599, fol. 552.

*manament que ningu vaja alla sot pena de desterro de la Cort*⁶⁸. No obstante, consiguió la mediación del Vicecanciller para que Lerma le concediera la preceptiva autorización⁶⁹.

Con independencia de que en la remisión de papeles se anotara "en sus reales manos" o se dieran directamente al Vicecanciller, la oportunidad de exponer oralmente el trasunto de los negocios, incluso en las propias casas de los miembros del Consejo, debía obrar mejores efectos que si los planteamientos se hacían exclusivamente por escrito, pues tal como afirmaba en 1617 el Dr. Limiñana "*la viva voz hace mucho al caso, porque puedo dar satisfacción a la réplica que se da*", de modo que determinada suplicación "*la he puesto después de haber informado a estos señores (del Consejo) uno por uno para que estén prevenidos*"⁷⁰. Y, en efecto, la mayor parte de los síndicos y embajadores oriolanos en la corte dedicaron buena parte de las cartas enviadas a la ciudad a narrar sus encuentros con el Vicecanciller, los regentes valencianos y el secretario, a reproducir las conversaciones que mantuvieron e incluso a describir algunos detalles sobre las personas y su entorno que denotan, a veces, cierta familiaridad en el trato. Algunos, como el embajador Palma de Fontes acompañó en 1613 en su coche al fiscal y al regente D. Felipe Tallada, en cuya casa y también en la del secretario Domingo Ortiz proseguía las negociaciones⁷¹. Las visitas de los gestores a los domicilios particulares de estas personalidades parecen haber sido una práctica frecuente, pues también son mencionadas por el embajador Maza de Lizana y el síndico Claros⁷², y en ocasiones pudieron derivar en algún exceso formal en sus actuaciones, si hemos de creer al síndico Tallaferro cuando en 1619 relataba cómo, tras recibir cierta respuesta "*yo fui luego con mucha colera a D. Francisco de Castellví y le dije todo lo contenido en una petición que hoy he presentado, y haviendome oído quedó suspenso y me dijo que presentase la petición y haviéndola leído en Consejo determinaron prorrogar la sentencia*"⁷³.

La diligencia, el poder de convicción, la insistencia y, como elogiara el síndico Miguel Urgel en referencia a las maneras del embajador Nicolau Viudes, en 1609, el mostrarse "*tan fogoso y solícito*"⁷⁴, eran cualidades apreciadas en un buen gestor que facilitaban, cuando menos, la admisión a consulta de determinados asuntos. Como también lo hacía el uso adecuado del sentido de la oportunidad, tanto para evitar molestias o situaciones desagradables que pudieran importunar y, en consecuencia, indisponer a los consejeros cuyo favor se trataba de recabar, como para esperar el momento más propicio que asegurase el apoyo necesario. A finales de octubre de 1612 el síndico Claros relataba su intención de realizar cierta solicitud al nuevo Vicecanciller, pero "*estaba indispuerto y no fue a Consejo y por no enfiarlo no le quise hablar ni pedir la respuesta*"⁷⁵. Y en otra ocasión de ausencia por enfermedad de un consejero supuestamente favorable a las posiciones oriolanas -como el regente

⁶⁸ AMO. Contestador de 1605, fol. 480.

⁶⁹ "Un cavallero de Origuella que se llama Andres Martin a llegado a esta ciudad, imbiado por la de Origuella a besar la mano a Su Magestad y darle la norabuena del nascimiento del Principe nuestro señor y alumbramiento de la Magestad de la Reyna y trahe cartas del (Virrey) señor Marqués de Villamizar en su recommendation. Hagolo saber a Vra. Excelencia para que siendo Su Magestad servido de darle lugar para que execute su embaxada le mande dar licentia para ir a encontrarle a donde Su Magestad se hallare", Ibidem., fol. 504.

⁷⁰ AMO. Contestador de 1617, fol. 447r-v.

⁷¹ AMO. Contestador de 1603, fols. 574, 576; Contestador de 1612, fol. 237; Contestador de 1613, fol. 477v.

⁷² AMO. Contestador de 1609, fol. 507

⁷³ AMO. Contestador de 1619, fol. 371.

⁷⁴ AMO. Contestador de 1609, fol. 508.

⁷⁵ AMO. Contestador de 1612, fol. 237.

Núñez en noviembre de 1603-, la prudencia dictaba, a juicio del embajador Maza de Lizana, hacer lo posible por aplazar el tratamiento del negocio hasta su recuperación⁷⁶.

Otro de los recursos utilizados por los agentes como parte de su estrategia negociadora era la anticipación a los movimientos de la parte contraria en un litigio y el acceso a informaciones secretas o privilegiadas que pudieran ser de utilidad para la buena marcha de las gestiones realizadas. Para ello se requería la colaboración del personal subalterno del Consejo, o incluso la confidencia de algún regente especialmente *inclinado* hacia las posiciones oriolanas. En 1603 D. Gonzalo Maza de Lizana encarecía a las autoridades oriolanas el recato con que debían guardar cierto documento confidencial que adjuntaba a su misiva, pues -refiriéndose al mismo- *"el traslado de la carta que escribe el Duque (de Lerma) al Vicechanciller miren V. Mercedes que se me dio debajo de secreto y no sería bien que se publique sino que se tenga por V. mercedes hasta que se acaben estas cosas"*⁷⁷. Y en 1617 era el Dr. Limiñana quien hacía mención expresa a la existencia de confidentes: *"Com tinch espies secretes per a que m'avisen si's posa res, vingue una d'elles y'm dix: per lo Fiscal se ha ordenat una introductio de apellació"*⁷⁸.

Naturalmente, para mantener operativas estas fuentes de información se precisaba buena bolsa. Las atenciones de tipo económico para con los miembros del Consejo y el personal subalterno resultaban, por tanto, si no imprescindibles sí muy convenientes para hacerse acreedor a sus favores. En 1614 el síndico Juan Pérez Nuño solicitaba de las autoridades oriolanas *"se sirviesen de enviar algunos regalos a esta Corte para poder dar a estos señores.....siendo cosa que tanto importaba.....mucho pudiera decir acerca de lo que esto luce"*⁷⁹; y dos años antes era el síndico Miguel Jerónimo Claros quien advertía que *"si vs. ms. suelen enviar algún regalo a los señores del Consejo por Navidades, hagan porque venga a buen tiempo"*⁸⁰. Esta práctica debió estar bastante generalizada entre los municipios con agentes en la corte y no parece que estuviera reñida con el decoro y la apariencia de imparcialidad que había esperar de los miembros de tan respetable institución, siempre que se mantuviera dentro de unos límites y no degradase en sospechas de soborno. En 1605 lo había expresado claramente el síndico Miguel Urgel cuando aconsejaba a la ciudad *"abran las manos y sean liberales con quien les sirve, viene cerca Pascua y aquí se reciben con buen gusto y voluntad regalos de turrón y otros cualesquier, aunque sean dineros. Lo consideren, porque es de diestros maestros de esgrima señalar y no herir"*⁸¹. Y en efecto, siguiendo recomendaciones de este tipo varios meses atrás se había concedido ya aguinaldo de 2.000 reales al secretario Domingo Ortiz⁸².

Más no eran solamente los miembros del Consejo quienes agradecían las dádivas con que eran agasajados por los favores que de ellos se esperaban. También los síndicos y, en menor medida, los embajadores, confiaban en obtener regalos, aguinaldos, entrenas, albriicias -pues de todos estos modos se les conocía- y gratificaciones especiales como premio por las gestiones culminadas con éxito. Y así lo expresaban sin el menor disimulo, reiterando a veces a través de la correspondencia la reclamación de estas recompensas por su dedicación, diligencia, buen hacer y resultados obtenidos. Algunos, como Miguel Jerónimo Claros, quizá exageraron en sus peticiones, que se tornaron en velada amenaza cuando en 1617

⁷⁶ AMO. Contestador de 1603, fols. 574-575v.

⁷⁷ AMO. Contestador de 1603, fol. 574v.

⁷⁸ AMO. Contestador de 1617, fol. 396.

⁷⁹ AMO. Contestador de 1614, fol. 375v.

⁸⁰ AMO. Contestador de 1612, fol. 169v.

⁸¹ AMO. Contestador de 1605, fol. 551.

⁸² Ibidem., fol. 407v.

-tras dos años sin cobrar siquiera su salario ordinario- declaraba que “*de esa causa a mí se me debe el aguinaldo por el buen suceso de buena sentencia y algunos gastos de intimas y otras cosas...y he de contradecir si no me pagan a la sentencia si se sacare*”; mientras que su protagonismo real, según versión del Dr. Limiñana, había sido insignificante, pues “*en el proceso sólo hay una petición ordenada y puesta por Claros de 8 a 10 renglones y una intima*”.⁸³

Ciertamente, el coste económico de los negocios gestionados en la corte suponían cuantiosos desembolsos por parte de la hacienda municipal; “*es cosa de espanto el gasto que se haze, y por la necesidad que se ofrece y aver de acudir cada dia con la volsa abierta, y por no faltar a la honrra de la ciudad, he havido de valerme de un mercader amigo mío*”⁸⁴, exclamaba en 1603 el embajador Maza de Lizana desde Valladolid. Al salario ordinario del síndico, consistente en 25 libras anuales, y a las dietas y salarios de los embajadores, a razón de dos libras diarias, más las gratificaciones especiales, las ayudas de costa por motivos varios -los lutos por las exequias de la Reina en 1612, por ejemplo- y los regalos a diversas personalidades de la corte, había que sumar los gastos de correos y los costes procesales. Cualquier cálculo de lo que, por término medio, podía gastar la ciudad durante un año por todos estos conceptos, no dejaría de ser meramente aproximativo, pues son muchas las variables a tener en cuenta y su incidencia muy desigual de un año para otro; pero quizá no sea exagerada una estimación en torno a las 500 libras de media anual, sólo en la corte de Madrid. Aunque se trata de un caso extremo, en 1617 las autoridades oriolanas afirmaban que sólo un pleito que llevaban contra la ciudad de Alicante, por suplicación de ésta en el Consejo de una sentencia dada por la Audiencia, había generado ya más de 3.000 libras de gasto⁸⁵. Pero, en general, los gastos procesales de cualquier negocio no eran, por término medio, ni remotamente tan costosos y se aproximaban más a los señalados en 1614 por Juan Pérez Nuño cuando informaba que “*para el depósito de la centencia son menester seiscientos y cinquenta y dos reales y para las costas procesales, escribanos de mandamiento y registro y otras cosas hasta cien ducados*”⁸⁶.

De entre las partidas más costosas, destacaba con frecuencia el mantenimiento del mensajero, pues su estancia en la corte podía prolongarse desde 6 u 8 semanas -Jaime Togores en 1599, D. Luis Togores en 1617- hasta cerca de un año -D. Jaume Rosell en 1619/20-, siendo lo más habitual que permaneciera en ella entre tres y cinco meses -Josep Orumbella en 1600, Andreu Martí en 1605, Nicolau Viudes en 1609, D. Jaime Rosell en 1614. La cantidad y dificultades de los negocios encomendados, así como la agenda del Consejo, la acumulación de días feriados y otros elementos de oportunidad política eran factores que determinaban a menudo la duración de una embajada. Pero tampoco era infrecuente que estos legados prolongaran innecesariamente su estancia, no tanto por el mero interés de embolsarse el salario y las dietas correspondientes, cuanto para atender asuntos propios. Por otro lado, la imposible determinación objetiva del momento en que la presencia de un mensajero debía considerarse ya innecesaria en la corte contribuía a dotar de una gran elasticidad a la duración de las embajadas, pues en la práctica resultaba muy difícil delimitar las funciones que le eran propias de las que correspondían a los síndicos ordinarios. A veces era el propio embajador quién, tras exponer el avanzado estado en que se hallaban los negocios encomendados, solicitaba licencia a las autoridades municipales para regresar a su casa o comu-

⁸³ AMO. Contestador de 1617, fol. 416v.

⁸⁴ AMO. Contestador de 1603, fol. 563v.

⁸⁵ AMO. Contestador de 1617, fol. 467.

⁸⁶ AMO. Contestador de 1614, fol. 375.

nicaba su intención de hacerlo en breve plazo⁸⁷. Pero también había ocasiones en que era el secretario del Consejo quien tenía que informar a la ciudad de la conveniencia de hacer volver al mensajero, toda vez que su cometido se daba por concluido y no podía afectar ya a la resolución definitiva del negocio que le retenía⁸⁸.

Para el envío a la corte de las sumas requeridas, que llegaban muy espaciadas en el tiempo y a menudo tras prolongados retrasos, los sistemas utilizados eran fundamentalmente dos, siendo el más frecuente el transporte físico del numerario. Habitualmente, los correos y mensajeros llevaban consigo algunas cantidades, sobre todo para atender pagos menores; pero tampoco era inusual cuando había que afrontar grandes dispendios recurrir a las letras de cambio, giradas en su mayor parte en Alicante, Valencia y Murcia. Entre quienes proporcionaban crédito a los gestores oriolanos en la corte figuraban negociantes -como Rodrigo de Mallorca y su agente en Valencia Alonso de Amaya⁸⁹; Alonso Pérez, con su agente murciano Diego Hernández de Luxan⁹⁰, Álvaro Acosta Vitoria y su agente murciano Fernando Álvarez Vitoria⁹¹- y hasta moriscos de la vecina villa señorial de Crevillente⁹². Las dificultades para obtener dinero con prontitud determinaron que en alguna ocasión fueran objeto de prácticas usurarias, como las denunciadas en 1617 por el Dr. Limiñana contra un portugués que aceptó póliza de 1.375 reales "*a dotze dies vista, lo que james se ha fet*"⁹³ y aún le escamoteó otros dos días más.

Para concluir, en un balance global acerca de los elementos que se han ido señalando en la configuración del marco de relaciones establecidas entre el municipio y la administración central a través de sus agentes destacados en la corte, y con independencia de las materias concretas que fueron objeto de negociación entre ambas instancias de poder, destaca la frecuencia en el envío de legados extraordinarios que asumieron la representación urbana, así como el alcance político de esta vía de relación directa e institucionalizada con el entorno del monarca. De generalizarse lo observado para el caso oriolano a otros municipios importantes -valencianos o no- y a periodos cronológicos más extensos del aquí considerado, quedaría de relieve el enorme protagonismo de este marco particular de relaciones entre los súbditos y la Corona frente a otros de base corporativa y/o territorial más amplia. Desde esta perspectiva, fenómenos tales como la creciente relegación de las cortes, en tanto que representación corporativa del reino, no habrían supuesto un vacío decisivo en la manifestación de esas relaciones, y quizá contribuyera a la consolidación de otras vías alternativas, también tradicionales, basadas en la negociación particularizada. Una vías cuyo desarrollo pudo interesar a la Corona, que de este modo fragmentaba y aislaba a sus interlocutores institucionales, y que tampoco desagradaba a estos últimos -las corporaciones urbanas-, dadas las oportunidades de promoción política que ofrecía.

⁸⁷ AMO. Contestador de 1614, fol. 415v;

⁸⁸ AMO. Contestador de 1605, fol. 503r-v.

⁸⁹ AMO. Contestador de 1603, fol. 567r-v.

⁹⁰ AMO. Contestador de 1609, fol. 461

⁹¹ AMO. Contestador de 1617, fol. 478.

⁹² AMO. Contestador de 1609, fols. 442, 460.

⁹³ AMO. Contestador de 1617, fol. 448.